

Ruanda en perspectiva

Diego Buffa

María José Becerra

Universidad Nacional de Córdoba

Resumen

En los últimos años la literatura académica ha abordado el genocidio de Ruanda, desencadenado en abril de 1994, como un conflicto de orden exclusivamente étnico, motivado por disputas históricas entre la mayoría hutu y la minoría tusti, gestadas a lo largo de una atribulada historia del país. Esta mirada hegemónica presenta al genocidio ruandés bajo un escenario fatalista, signado por un estado natural prepolítico hobbesiano, movilizado más por la pasión que por la razón y donde las acciones humanas se desarrollan al margen de toda consideración moral. Estos abordajes de orden unicausal y profundamente maniqueos, continúan reproduciendo, bajo renovadas conceptualizaciones, estereotipos neocoloniales, precientíficos.

En ese contexto, el propósito de nuestro trabajo es presentar el complejo entramado en que se gestó el genocidio en Ruanda, propiciando una mirada multicausal. Esto comprende un análisis histórico que nos permita vislumbrar la estructuración de la sociedad ruandesa durante el período colonial y su reproducción en su fase independiente. Al mismo tiempo, nuestra intención es exponer el accionar de los actores locales, regionales e internacionales, como tres niveles protagónicos que interactuaron a lo largo del genocidio, potenciando las masacres, los desplazamientos y la crisis humanitaria en el país. Esta aproximación, desligada de la lógica de la irracionalidad y de la inexorabilidad de la lucha étnica atávica, procura lograr una comprensión mas acabada de los sucesos acaecidos en Ruanda hace ya quince años.

Palabras clave: Ruanda –Grandes Lagos – Genocidio - Intervencionismo Humanitario

Abstract

Over the recent years the academic references have dealt with the Rwanda genocide, which broke out in April, 1994, as an exclusively ethnic conflict caused by historical disputes between the Hutu majority and the Tutsi minority all along that country's troubled history. In such hegemonic light, Rwanda's genocide is introduced in a fatalistic manner, signalled by a pre-political Hobbesian naturalistic state where passions rather than reason rule and where human actions evolve away from moral considerations. Such profoundly manicheistic uni-

causal approach continues to reproduce, in renewed conceptualizations, the pre-scientific neo-colonialist stereotypes.

In the mentioned context, this paper introduces the complex structure where Rwanda's genocide occurred, with the purpose of offering a multi-causal approach. A historical analysis helps to understand the structuring of the Rwandan society during the colonial period and its reproduction in independence. At the same time, the purpose is also to expose the performance of the local, regional and international actors taken as the three interacting central levels during the genocide, by multiplying massacres, displacements and humanitarian crisis in the country. This approach, free of the irrational logic of an inexorable atavistic ethnic fight is aimed to reach a more thorough understanding of the Rwanda of fifteen years ago.

Key Words: Rwanda – the Great lakes – Genocide – Humanitarian Interventionism

En los últimos años la literatura académica ha abordado el genocidio de Ruanda, desencadenado en abril de 1994, como un conflicto de orden exclusivamente étnico, motivado por disputas históricas entre la mayoría hutu y la minoría tusti, gestadas a lo largo de una atribulada historia del país. En tal sentido, la narrativa predominante se centró en lo que Paul Richards dio en llamar en la segunda mitad de los años noventa, el “nuevo barbarismo” (Richards, 1996). Dicho concepto, señala Itziar Ruiz-Giménez, define los conflictos africanos como “nihilistas”, anárquicos, salvajes e irracionales. Esta lectura esencialista fija su atención en torno a la etnicidad, a través de un discurso de índole racial y aferrado a determinismos bioculturales.

... el “nuevo barbarismo” tiende a naturalizar las identidades étnicas entendiéndolas como primarias, innatas e irracionales cuando, en mi opinión, son construidas social e históricamente. Por otra parte, este discurso explica los conflictos y la violencia por la mera existencia de diferentes e irreductibles identidades étnicas, religiosas o culturales. Ello oscurece el carácter dinámico, multifacético e interactivo de las identidades étnicas, así como la capacidad de muchos grupos étnico-culturales de convivir pacíficamente en gran parte de África y del mundo. Y, sobre todo, esconde la actuación y responsabilidad de diferentes actores y grupos sociales (africanos e internacionales) que, en su lucha por el poder y los recursos, instrumentalizan las identidades etnoculturales para movilizar a la población (Ruiz-Giménez Arrieta, 2002).

Esta mirada hegemónica presenta al genocidio ruandés bajo un escenario fatalista, signado por un estado natural prepolítico hobbesiano, movilizad más por la pasión que por la razón y donde las acciones humanas se desarrollan al margen de toda consideración moral. Esta “dramatización” tiene su expresión mas exacerbada en las diferentes coberturas y relatos periodísticos realizados por los *mass media* a lo largo del conflicto. En palabras de Mahmood Mamdani:

Su característica particular es escribir una pornografía de la violencia. Al igual que aquélla, quienes se desnudan son otros, no nosotros. La exposición de los

otros va de la mano con la afirmación no dicha de que no somos como ellos. Es una pornografía en donde la violencia sin sentido es un rasgo de las culturas de otros pueblos: donde ellos son violentos, pero nosotros somos pacíficos, y donde centrarnos en su degradación fácilmente se convierte en otra forma de celebrar y confirmar nuestro *status* superior. En el proceso, los relatos periodísticos también tendieron a reforzar afirmaciones más generales: que el mundo está, de hecho, dividido entre lo moderno y lo premoderno, donde lo moderno *hace* cultura, pero lo premoderno vive con una cultura eterna (Mamdani, 2003: 58).

Estos abordajes de orden unicausal y profundamente maniqueos, continúan reproduciendo, bajo renovadas conceptualizaciones, estereotipos neocoloniales, precientíficos, donde la problemática africana se encuentra encorsetada en lo que Lucia Alonso denomina los *cuatro jinetes del Apocalipsis*: guerra, hambre, epidemias y catástrofes naturales (Alonso, 2000).

El propósito de nuestro trabajo es presentar el complejo entramado en que se gestó el genocidio en Ruanda, propiciando una mirada multicausal. Esto comprende un análisis histórico que nos permita vislumbrar la estructuración de la sociedad ruandesa durante el período colonial y su reproducción en su fase independiente. Al mismo tiempo, nuestra intención es exponer el accionar de los actores locales, regionales e internacionales, como tres niveles protagónicos que interactuaron a lo largo del genocidio, potenciando las masacres, los desplazamientos y la crisis humanitaria en el país. Esta aproximación, desligada de la lógica de la irracionalidad y de la inexorabilidad de la lucha étnica atávica, procura lograr una comprensión mas acabada de los sucesos acaecidos en Ruanda hace ya quince años.

Institucionalización de un antagonismo histórico falsificado

La región de Ruanda estuvo habitada desde el siglo VI AC., aproximadamente, por la etnia tua. Este pueblo de cazadores y artesanos fue desplazado de forma progresiva desde el siglo XI por los hutu (de origen bantú), que pronto se transformaron en la etnia dominante. Hacia el siglo XIV inmigraron a la zona los tutti, procedentes desde el norte. Este último grupo se impuso definitivamente en el siglo XV, con la instauración de una monarquía.

Los primeros contactos con europeos tuvieron lugar hacia 1858, aunque sin una instalación definitiva de parte de éstos. En 1885 la Conferencia de Berlín, en la que se realizó el conocido “reparto” de África, le asignó este territorio al África Oriental Alemana –donde se incorporaron también los actuales territorios de Burundi y Tanzania–. Recién en 1899 quedó organizado el protectorado alemán de Ruanda, el que mantuvo en un principio la estructura social existente. La estrategia alemana, a partir de la instauración de un modelo colonial indirecto, propició el fortalecimiento de la monarquía ruandesa mediante la centralización y anexión de los principados humus. Esto contribuyó a concentrar aún más el poder en manos tutsis (Prunier, 1995: 25).

Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ruanda-Burundi pasó a manos de Bélgica, quién lo administró desde el Congo. De los tres grupos que habitaban la región, la minoría guerrera tutsi se consolidó en la dirección del Estado, apoyada por la metrópoli colonizadora y por la Iglesia. Esta última fue un importante factor de penetración, ya que permitió afianzar el poder de los tutsis al propagar la creencia de que eran superiores a los hutus. La adopción del cristianismo se convirtió en requisito para ser admitido en la élite

colonial, lo que llevó a conversiones masivas, pero también a una solidificación de las contradicciones de clase (Prunier, 1995: 32).

La irrupción del capitalismo agudizó aún más las diferencias, propiciando la manipulación de la etnicidad e imponiendo una legislación coercitiva y la propiedad privada de la tierra. Los belgas consideraron “inutilizados” los terrenos de propiedad colectiva, lo que reflejó un desprecio malsano por los méritos de las instituciones indígenas. Comúnmente, el Estado colonial expropió, redistribuyó o vendió la mayoría de las tierras comunales. Así, se privatizaron vastos territorios hutus para convertirlos en propiedades legales modernas en manos de tutsis (Leach, 2003: 329). Todo ello, hecho en desmedro de las prácticas consuetudinarias africanas, fue socavando los tradicionales lazos de solidaridad social. Asimismo, la imposición por parte de la administración belga de un documento de identidad con pertenencia étnica, cristalizó una política colonial que estaba orientada a presentar como opuesto a lo “tutsi” y lo “hutu”, como dos identidades políticas en pugna.

La finalización de la Segunda Guerra mundial y las transformaciones sistémicas que estimularon los procesos independentistas afroasiáticos propiciaron en Ruanda un movimiento emancipatorio, encarnado en el “Manifiesto hutu” de 1957, que impulsó la liberación de las mayorías marginadas. No obstante, dicha propuesta se opuso a la eliminación de la designación racial en las tarjetas de identidad, ya que ello crearía “el riesgo de evitar que la ley de estadísticas estableciera la realidad de los hechos” (Leach, 2003: 332).

En 1959 los agricultores hutu se rebelaron contra la monarquía tutsi y, como consecuencia de las matanzas, alrededor de 150 mil tutsis emigraron a países vecinos. Dos años más tarde se abolió la monarquía mediante un referéndum y, en sintonía con los nuevos vientos, el gobierno belga optó por retirarse, otorgando la independencia. El Partido del Movimiento de Emancipación Hutu (Parmehutu) ganó las elecciones supervisadas por las Naciones Unidas. En 1962 se proclamó la primera república, bajo la jefatura de Grégoire Kabyanda, separándose el territorio de su vecino Burundi.

Carente de bases programáticas transformadoras, el Parmehutu organizó la sociedad con criterios étnicos: mientras que los hutus se ocuparían de las tareas artesanales y los tutsis de la ganadería, la propiedad de la tierra quedaría en manos de los hutus. Se trató de un sistema que no contemplaba la posibilidad de un desarrollo urbano. La mayoría de la población vivirá de los recursos agrícolas, bajo una economía de autosubsistencia y con una muy débil actividad comercial.

Al año siguiente, en 1963, estalló una nueva guerra civil con la invasión de tutsis exiliados desde Burundi. La represión del ejército hutu causó más de 20 mil muertos y la expulsión del país de más de 160 mil tutsis. La masacre tuvo lugar sin testigos externos, ya que fue prohibida la entrada de periodistas y medios de comunicación. En ese contexto, la Primera República bajo la presidencia de Kabyanda, se comenzó a percibir como un régimen despótico y personalista, con un aparato de coacción que no dudaba en abusar de su poder de muerte frente a sus opositores.

A finales de la década del sesenta la crisis económica se agravó, por lo cual el gobierno debió incentivar la reintroducción del cultivo de café –cuyas plantaciones habían sido quemadas en las revueltas campesinas de 1959, por considerarlas un resabio del colonialismo–. Así, Ruanda se convirtió en uno de los mayores productores de café. Este cambio generó con el tiempo la formación de una burguesía rural, lo que incentivó aún más las divisiones y resentimientos étnicos, con permanentes rebrotes de violencia.

En 1973 el régimen político se radicalizó, volviéndose más autoritario, ante la masacre de hutus en Burundi perpetrada un año antes. Esto produjo una nueva oleada migratoria de tutsis y disturbios civiles generalizados. Ante la amenaza de una nueva guerra civil, el general

Juvenal Habyarimana, quien hasta ese momento se desempeñaba como Ministro de Defensa, dio en mayo un golpe de Estado. Disolvió el Parmehutu, encarceló al Presidente e inició una campaña para restablecer relaciones con los países vecinos, las cuales se habían deteriorado durante el régimen depuesto.

En la Segunda República de Habyarimana, el estatus de los tutsi fue redefinido bajo nuevos parámetros:

De extranjeros residentes en la primera república, los tutsis pasaron a ser una minoría política en la segunda república. En lugar de la distinción entre hutu y tutsi, la segunda república destacó la distinción entre los tutsis de Rwanda y los tutsis en el exilio, fuera de Rwanda: mientras que los primeros fueron elevados políticamente como una minoría ruandesa que podía esperar legítimamente una representación minoritaria en sus instituciones políticas, los últimos fueron desnacionalizados como eternos extranjeros para los cuales ya no había lugar en Rwanda (Mamdani, 2003: 64).

La década de los ochenta estuvo signada por constantes crisis económicas. La caída del precio del café y las sequías redundaron en un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. En esos años, un grupo de exiliados tutsis crearon en Uganda el Frente Patriótico de Ruanda (FPR).

En 1988 Habyarimana fue reelecto y se renovó la Legislatura. De los diputados elegidos, once fueron mujeres –quienes accedían a cargos legislativos por primera vez– y sólo dos cargos fueron asignados a tutsis. En tal sentido, se propició una apertura a la participación de un género hasta entonces postergado, mas no a una minoría étnica.

Al año siguiente el FPR, proveniente de Uganda, entró en Ruanda, iniciándose así un período de enfrentamientos que se prolongó hasta 1994. Este nuevo punto de inflexión, que agudizó las contradicciones y tensiones internas ruandesas, devino como resultado de una crisis regional desde Uganda. El cambio la ley de ciudadanía en ese país vecino provocó un éxodo masivo de refugiados ruandeses. Para investigadores como Mamdani, dicha medida no fue simplemente un regreso armado a Ruanda, también fue una expulsión armada de Uganda (Mamdani, 2003: 64). Muchos de estos habían formado parte del Ejército Nacional de Resistencia (ENR) que entró en Kampala en enero de 1986 derrocando el régimen de Obote. Ahora, sin posibilidad de acceso a la tierra, si derechos políticos y sin patria que los contuviera, se precipitó una desertión masiva de tutsis ruandeses del ejército ugandés al FPR. Esta era en realidad una misión suicida y sin retorno, dado que quienes desertaran del ENR y después regresaran a Uganda serían castigados con la pena de muerte (Mamdani, 1996: 27-28).

El gobierno sufrió una fractura ante la decisión de qué actitud tomar frente a los reclamos del FPR: el inicio del diálogo o su represión. Los hutus más radicales, hasta el momento marginados en la Segunda República, ganaron la puja. La violencia se incrementó y, simultáneamente, comenzó una campaña propagandística racista a través de la revista Kangura y la Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas.

Durante los meses subsiguientes, el “poder hutu” comenzó a contar con el apoyo francés, conformando sus propias milicias con entrenamiento galo, en especial los Interahamwe y los Impuzumugambi, y adquiriendo un control importante sobre las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), (Leach, 2003: 337).

Aun así, en ese clima tan enrarecido, en 1991 el gobierno se comprometió a emprender un proceso de democratización, como intento de generar las condiciones que permitieran lograr la paz. En tal sentido, se sancionó una nueva Constitución en la que se permitía el

multipartidismo, se creaba el cargo de Primer Ministro, se limitaba el ejercicio de la presidencia a dos períodos de cinco años y se establecía la separación de los poderes del Estado.

Sin embargo, esa “apertura” no se manifestó en actos concretos que cambiaran la situación de la población civil. De hecho, se hablaba de un “Estado Mayor en las sombras” que se encargaba del exterminio secreto de tutsis. El partido oficial, Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo (MRND), fue acusado por los partidos opositores –el Movimiento Democrático Republicano (MDR) y el Partido Liberal (PL)– de ser el responsable de las masacres.

En 1993 el gobierno y el FPR firmaron los acuerdos de paz en Arusha. Estos preveían la instalación de un gobierno de transición en donde estarían representados el FPR y la oposición política. Para garantizar el proceso, las Naciones Unidas enviaron una misión de paz (MINUAR) que reemplazó a las fuerzas francesas que se encontraban en el territorio desde 1990. Los sectores más radicalizados del régimen se opusieron y los acuerdos se postergaron en su ejecución. En tal sentido, la situación se volvió cada vez más volátil y las Naciones Unidas recomendaron a la MINUAR no intervenir, aún ante la denuncia concreta de que el gobierno se estaba armando.

La situación hizo eclosión el 6 de abril de 1994 cuando un misil¹, impactó en el avión presidencial, en el cual viajaban desde Arusha los jefes de gobierno de Ruanda y Burundi. Esto dio inicio al genocidio que en el espacio de cien días se cobró cerca de 800 mil vidas, exterminadas por el sólo hecho de ser tutsis o por la sospecha de que lo fueran. Lo mismo le sucedió a los hutus opositores al régimen político y también a los moderados que se negaron a prestar su concurso en el genocidio.

Como señaláramos anteriormente, este hecho atroz no puede ser explicado solamente como un conflicto étnico, especialmente si se tiene en cuenta que durante el período independiente se permitía el casamiento mixto y éste era practicado frecuentemente. El argumento étnico no alcanza para explicar porqué civiles masacraron a sus familiares, vecinos o amigos. No alcanza para justificar una de las peores matanzas del siglo pasado.

Entonces, es necesario preguntarse de dónde vinieron los fondos que permitieron la masacre y cómo fue que las políticas impuestas por los organismos internacionales aceleraron el proceso que condujo al genocidio. Es relevante, asimismo, analizar la presencia en la región de los diferentes países occidentales y el rol de los organismos de financiación internacional.

Los cómplices del silencio

La relación entre Bélgica y Ruanda, como ya se mencionó, data del período colonial y se prolongó durante la etapa independiente en forma de asesoramiento y ayuda. Con Francia, en cambio, el vínculo se fue construyendo sobre la base de la ampliación de la zona francófona. Esto se evidenció en un apoyo sistemático y concreto de Francia al régimen hutu de Habyarimana –acuerdos de cooperación militar, suministro de armas y apoyo logístico–. Esa colaboración fue más contundente a partir de la aparición, en 1986, del FPR. Éste, formado por tutsis en el exilio ugandés, como ya se mencionara, tenía como lengua común el inglés. De manera que el conflicto analizado se podría encuadrar también en la disputa por mantener zonas de dominación francófonas o anglófonas. La misma se manifestó en forma de préstamos, políticas económicas y venta de armamentos (Fisas, 1995).

La Primera República de Kayibanda –depuesto por el golpe de Estado de 1973–, era la garante del bloqueo a toda política de cambios estructurales. Por tal razón, el mandatario era sostenido por Bélgica, Francia y Suiza; y de hecho casi no existía la deuda externa. Con el advenimiento de la Segunda República esa situación se revirtió. Entre 1976 y 1994 la deuda externa de Ruanda se multiplicó por veinte (World Bank, 2001).

Entre finales de los ochenta y el año 1994, el gobierno de Habyarimana recibió numerosos préstamos que debían servir para insertar la economía ruandesa en la economía mundial. Para alcanzar ese objetivo el régimen se apropió de una parte considerable de tales préstamos para repartir entre sus “aliados internos”. Los créditos iban dirigidos a desarrollar la producción de café, té y estaño para la exportación, en detrimento de los cultivos destinados a satisfacer las necesidades locales de alimentos. Este modelo funcionó hasta mediados de la década de los ochenta, cuando cayeron los precios del estaño, primero, y luego los del café y del té.

Tal situación generó una crisis económica y la necesidad de buscar nuevos préstamos. Así en octubre de 1990, Ruanda firmó acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que implícitamente contemplaban la ejecución de Programas de Ajuste Estructural (PAE) para sortear los diversos apremios del país.

Los PAE preveían una disminución del gasto público a través del congelamiento de salarios y el despido de empleados públicos, no obstante lo cual se transfirieron una gran parte de los gastos al Ejército (Toussaint, 2004: 2).

El nivel de vida de la población cayó estrepitosamente debido a que, cuando el PAE se comenzó a aplicar, hubo una devaluación de la moneda local –el franco ruandés– que elevó abruptamente los precios de los productos de consumo. Paralelamente, la balanza de pagos se vio afectada, ante lo que el Fondo Monetario Internacional activó nuevas líneas de crédito para la compra de productos importados. El producto de la venta de estos bienes importados en el mercado local –que habían subido escandalosamente de precio– le permitió al Estado pagar los sueldos de los militares.

Aunque los precios de los productos importados subieron, los valores de compra del café a los productores se congelaron, tal como lo pedía el Fondo Monetario Internacional. La consecuencia directa de esto fue la ruina de miles de pequeños productores de café; la indirecta fue que éstos, junto a las capas más empobrecidas del pueblo, constituyeron una reserva permanente de reclutamiento para las milicias y el ejército.

Para rendir cuenta del uso de préstamos emanado de los organismos financieros internacionales, Ruanda fue autorizada por el Banco Mundial a presentar viejas facturas que justificaran la compra de bienes importados (Toussaint, 2004: 2). Este sistema permitió a las autoridades ruandesas financiar la compra masiva de armas que luego fueron utilizadas en el genocidio. Así, los gastos militares se triplicaron entre 1990 y 1992.

El Banco Mundial entonces amenazó con cortar el flujo de préstamos si no cesaba la compra de armas. En consecuencia el gobierno debió “disimular” de alguna forma los gastos militares: los camiones comprados para el ejército fueron imputados al presupuesto del Ministerio de Transporte; una parte importante del combustible utilizado por las milicias y el ejército fue imputada al Ministerio de Salud (Chossudovsky y Galand, 1996).

Esta situación se mantuvo hasta 1993, cuando los organismos internacionales cortaron el flujo de dinero pero no denunciaron la existencia de cuentas bancarias que las autoridades ruandesas poseían en el extranjero –y de las que grandes sumas quedaban disponibles para la compra de armas–.

Según Toussaint, estos organismos faltaron a su deber al seguir enviando dinero aún cuando sabían que con él se compraban armas. Así incumplieron con su deber al no controlar

qué uso se le daba al dinero que prestaban. Permitieron abierta y directamente la preparación del genocidio.

Para que el proyecto genocida cuajara no alcanzaba con que fuera concebido, planificado y dotado de instrumentos para su ejecución. Se precisaba además de una masa empobrecida, lumpenizada, preparada y lista para realizarlo. Ruanda es un país donde el 90% de la población vive en el campo y, de ésta, el 20% dispone de menos de una hectárea para su subsistencia. Según Maton, entre 1982 y 1994 la mayoría de la población se empobreció, mientras que un pequeño grupo se enriqueció como nunca antes (Maton, 1994: 43).

Llegado a este punto cabe preguntarse quién se benefició con la venta de armas, y qué países fueron los que asistieron al régimen. Los principales proveedores fueron entre 1990 y 1994: Francia, Bélgica, Sudáfrica, Egipto y la República Popular China. Esta última les suministró de machetes; en cambio Egipto –a través de su viceministro de Asuntos Extranjeros, Boutros Gali– le ofreció un crédito sin interés al gobierno para la compra de armas de infantería.

Esta situación no terminó con el embargo de armas que decretó la ONU en mayo de 1994, por el contrario, Francia y Gran Bretaña continuaron vendiendo armas –en especial la primera–, aportando ayuda financiera y logística –por ejemplo posibilitar que en Goma se instalara una sede del Banco Nacional de Ruanda y desde allí se compraran armas– para que, desde el exilio, el régimen hutu continuara con su lucha.

Cronología de la acción de la comunidad internacional en el conflicto

En octubre de 1993 llegaron a Kigali las fuerzas de UNAMIR, con un mandato limitado de resguardo de los acuerdos de paz de Arusha y de legítima defensa. Este contingente estuvo integrado por 2700 efectivos de Bélgica, Ghana y Bangladesh, al mando del general canadiense Romeo Dallaire.

Paralelamente, el 21 de octubre de 1993, como consecuencia de un golpe de Estado en el vecino Burundi, el primer presidente hutu Melchior fue asesinado al igual que 50 mil ciudadanos perteneciente a su etnia, mientras que otros 280 mil cruzaron la frontera hacia Ruanda incorporándose en gran número a las filas de las milicias Interhamwe e Impuzemugambi.

Pese al evidente incremento de la conflictividad, un día antes del estallido del genocidio ruandés el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó que si efectivamente no se constata un gobierno de transición que incluyera a los dos actores en pugna –tal como lo especificaban los acuerdos de Arusha–, en seis meses se retiraría las fuerzas desplegadas de UNAMIR del territorio.

Estados Unidos –potencia hegemónica a partir de la finalización de la contienda Este-Oeste– tras su fracaso en Somalia asumió una política reticente en cuanto a su participación e involucramiento en conflictos en el escenario africano. Durante la administración Clinton esta actitud gravitará particularmente frente al caso de Ruanda en el seno de las Naciones Unidas. Dicha administración, a partir de entonces, subordinará su presencia en operaciones de intervencionismo humanitario a los casos en donde exista un *interés nacional* por parte de los Estados Unidos; limitando de esta manera su accionar y el de un conjunto de países aliados que supieron acompañar este discurso (Buffa y Becerra, 2008).

Con el estallido del genocidio el 6 de abril de 1994, la situación adquirió un ritmo vertiginoso. A los pocos minutos de conocerse la noticia de la muerte del presidente

Habyarimana, las milicias Interhamwe e Impuzemugambi, conjuntamente con miembros de la guardia presidencial, cercaron Kigali y recorrieron sus calles con listas de eventuales “objetivos”. Ante este nuevo panorama, las tropas del FPR rompieron el alto al fuego y comenzaron a movilizarse en pos de detener las matanzas. Por su parte, 1500 soldados franceses arribaron a la capital ruandesa en una operación relámpago, implantando un puente que permitió la salida inmediata de diplomáticos, prensa extranjera, miembros de organizaciones humanitarias, religiosos, como así también de unos 400 hutus familiares o del círculo íntimo de Habyarimana. La incursión francesa no contempló la inclusión de ningún tutsi entre los evacuados, al mismo tiempo que –de acuerdo con declaraciones de Luc Marchal, coronel belga integrante de UNAMIR– los aviones franceses desembarcaron armas y municiones para el ejército ruandés (Ruiz-Giménez Arrieta, 2005: 199). Las fuerzas internacionales desplegadas, pese a que su mandato no lo contemplaba, colaboraron con la evacuación.

El abandono de la comunidad internacional, ante el estallido del genocidio, lo podremos visualizar a partir de otras medidas adoptadas por los actores involucrados.

Durante los primeros días de masacre en Kigali, fue asesinada la Primer Ministra Agathe Uwilingiyimana, conjuntamente con diez soldados belgas que la custodiaban. Como correlato de ello, el gobierno de Bélgica retiró sus hombres de UNAMIR, un tercio del total de la fuerza. Por su parte la Resolución 912 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –21 de abril de 1994–, redujo la dotación de la operación de mantenimiento de la paz en Ruanda a solo 270 soldados, con mandato restringido a la simple mediación.² Paralelamente, una semana después, el Consejo de Seguridad aprobó el incremento de las tropas de UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina³, dejando entrever una política de doble rasero de la comunidad internacional que sumía a los conflictos africanos en un peldaño inferior, haciendo suyo de este modo el discurso del “nuevo barbarismo”.

Las imágenes de cadáveres flotando en la región de los Grandes Lagos y del exterminio sistemático de personas reflejadas por los medios de prensa y que recorrieron el mundo, le impuso al Consejo de Seguridad rever su estrategia hacia Ruanda. En tal sentido optó por abrir paso a una nueva fase en la intervención del conflicto, con la creación de UNAMIR II. Esta nueva iniciativa contempló el despliegue de 5500 soldados en el terreno y la extensión del mandato para proteger a los desplazados. Al mismo tiempo, aunque se impuso un embargo de armas al amparo del capítulo VII, no autorizó a la Misión el uso de la fuerza armada, salvo en legítima defensa.⁴

Dos meses después, el conjunto de efectivos reclutados para integrar la fuerza de UNAMIR II no superó los 550 hombres. Mientras que Etiopía, Ghana, Nigeria, Senegal y Zimbabwe ofrecieron sus tropas para completar los miembros de la misión, se presentaron escollos por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña a la hora de facilitar recursos y equipamiento necesarios para su despliegue.

Ante semejante inacción, la OUA, hutus moderados y dirigentes africanos como Desmond Tutu y Nelson Mandela, ofrecieron sus servicios para mediar entre los contendientes en pugna y tratar de poner fin al genocidio. Sorpresivamente y abortando estas incipientes negociaciones, el Consejo de Seguridad autorizó la intervención francesa conocida como “Operación Turquesa”, aprobando en este caso el uso de la fuerza militar denegada a UNAMIR II. Tras la autorización, las tropas francesas establecieron una zona de seguridad en el sureste ruandés, siendo acogidos efusivamente por sus antiguos discípulos de las milicias Interhamwe. Dicha operación, promocionada como de *acción humanitaria*, no se correspondía con el tipo de tropas especiales desplegadas en el campo y con el importante equipamiento bélico y logístico. Por su parte, el FPR continuó su avance y el 4 de julio tomó Kigali. Dos semanas después proclamó la victoria y un alto al fuego unilateral. La toma de la capital ruandesa por parte de las

fuerzas tutsis propició la huida, en menos de tres días, de alrededor de un millón de hutus temerosos de represalia, principalmente hacia la zona protegida por los franceses. Por su parte, el gobierno francés prohibió la entrada del FPR en su zona de seguridad, interponiéndose entre las partes, con lo que vulneró el mandato de neutralidad y no interferencia en el conflicto que le otorgó la resolución 929 del Consejo de Seguridad (Ruiz-Giménez Arrieta, 2005: 207). El corredor custodiado por las tropas francesas hacia el este de Zaire permitió no solamente la huida del pueblo hutu temeroso ante la nueva situación nacional sino que garantizó la fuga de los principales responsables del genocidio y el vaciamiento de las arcas del gobierno por parte de la dirigencia derrocada. Paralelamente, posibilitó la destrucción de toda evidencia que comprometiera al gobierno francés con sus hasta entonces socios en la consubstanciación del genocidio.

Mucho tiempo después de los ominosos cien días que estremecieron a Ruanda, la comunidad internacional en su conjunto volvió nuevamente su rostro hacia esta región. Recién en octubre la UNAMIR II dispuso finalmente de los 5500 efectivos previstos en mayo por la Resolución 918 y en noviembre se creó bajo el paraguas de Naciones Unidas el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Por su parte, los Estados Unidos con unos 3000 soldados –a los que se le sumaron efectivos de Alemania, Australia, Canadá, Holanda, Irlanda, Israel, Japón y Nueva Zelanda– desplegó en los campos de refugiados del norte de Zaire la “Operación Esperanza”. Dicha Operación de orden humanitario, a la que se sumaron más de 200 organizaciones no gubernamentales, en opinión del general Dallarie representó una farsa, un “lavado de conciencia” de los países occidentales frente a los medios y sus electorados (Ruiz-Giménez Arrieta, 2005: 209).

Un ejercicio de la memoria

¿Cómo se “sale” de tanto horror? Indudablemente manteniendo vivo lo que sucedió, recordando y tratando de reconstruir las relaciones sociales. Esta no es una tarea fácil. Ha llevado a una ardua discusión dentro de la sociedad ruandesa con relación a si no es mejor olvidar el pasado y continuar “hacia delante”. Sin embargo, antes de transformarse en un asunto del pasado, la realidad golpea día a día a los ruandeses. Las secuelas son muchas y aún no se ha logrado restablecer el entramado social.

Como reflexiones finales y posicionándonos en relación a lo vertido en estas páginas, estamos convencidos de que aunque el colonialismo representó la génesis de la violencia entre lo tutsi y lo hutu –a través de lo que Hobsbawm y Ranger (2002) denominaran “la invención de la tradición” o el “Dividir para dominar” de Wesseling (1998) –, ello no alcanza para comprender porqué la violencia se perpetuó y reprodujo durante la fase independentista.

La conformación de Estado-Nación ruandés, lejos de afrontar la herencia colonial como un problema de clase, se proyectó como la “nación hutu”, donde los tutsis debían pagar por sus posiciones de privilegio precedentes. No obstante, la construcción de un discurso dicotómico e impregnado de argumentos estereotipados en la etnicidad no debe introducirnos a la confusión e ignorar una trama compleja compuesta por intereses económicos de diversos órdenes, inestabilidades en el balance de poder regional e influjos sistémicos que, a nuestro criterio, constituyen las variables explicativas cardinales de las tensiones intraestatales que desembocaron en el genocidio ruandés.

Notas

1. Pese a que en un principio hubo múltiples conjeturas –fundamentalmente desde los sectores más radicalizados del gobierno ruandés– que responsabilizaban a efectivos del FPR e incluso de la propia UNAMIR en el atentado, en la actualidad la mayoría de los investigadores coinciden en que el mismo, fue perpetrado por la propia guardia presidencial con el apoyo de mercenarios franceses, utilizándolo como excusa para desatar el genocidio.
2. NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad. S/RES/912, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3368ª sesión, celebrada el 21 de abril de 1994.
3. El 27 de abril de 1994, el Consejo de Seguridad, en su resolución 914 (1994), autorizó, como recomendaba el Secretario General, un aumento de los efectivos de la UNPROFOR de hasta 6.550 soldados adicionales, 150 observadores militares y 275 supervisores de policía civil, en http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_b.htm
4. NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad. S/RES/918, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3377ª sesión, celebrada el 17 de mayo de 1994.

Bibliografía

- ALONSO, Lucía (2000), *Pensando en África: una excursión a los tópicos del continente*, Barcelona: Icaria Editorial.
- BUFFA, Diego y BECERRA, María José (2008), “El Intervencionismo Humanitario en África Subsahariana. Actores, instituciones y prácticas bajo un nuevo orden internacional.”. *Ciências & Letras*, Nº 44, Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras, Porto Alegre, Brasil.
- CHOSSUDOVSKY, Michel; GALAND, Pierre (1996), “Le Génocide de 1994, L’usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds”, Ottawa et Bruxelles, <http://globalresearch.ca/articles/CHO403F.html>
- FISAS, Vicenç (1995), *La compasión no basta*. Barcelona: Icaria editorial
- HOBBSAWM, Eric y RANGER, Terence (eds.), (2002), *La invención de la tradición*, Barcelona: Crítica.
- LEACH, Pamela (2003), “Rwanda: para deconstruir un genocidio ‘evitable’”. *Estudios de Asia y África*, nº 002, año/vol. XXXVIII, El Colegio de México, México.
- MAMDANI, Mahmood (1996), “From Conquest to Consent as the Basic of State Formation: Reflections on Rwanda”. *New Left Review*, nº 216, March-April.
- _____ (2003), “Darle sentido histórico a la violencia política en el África poscolonial”. *ISTOR: África, la historia africana en la era de la descolonización*, Nº 14, Año IV, División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, Otoño.
- MATON, Jef (1994), *Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993. Le dixième décile en face de l’apocalypse*, State University of Ghent, Faculty of Economics, Unit for Development Research and Teaching.
- PRUNIER, Gerard (1995), *The Rwanda Crisis: History of a Genocide*, Nueva York: Columbia University Press.
- RICHARDS, Paul (1996), *Fighting for the Rain Forest: War, Youth and Resources in Sierra Leone*, The International African Institute in association with James Currey, Oxford, Londres.

RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar (2002), “Los conflictos armados del África subsahariana contemporánea”. *Revista Pueblos*, Nº 4, **Madrid, España.**

_____ (2005), *La historia de la intervención humanitaria: el imperialismo altruista*, Madrid: Los libros de la Catarata.

TOUSSAINT, Eric (2004), “Ruanda: los acreedores del genocidio”, en BUFFA, Diego “A 10 años del genocidio en Rwanda”. *Anuario de Instituto de Relaciones Internacionales*, Universidad Nacional de La Plata, 2004.

WESSELING, H. L., (1998), *Dividir para dominar. A partilha da África 1880-1914*, Río de Janeiro: Editora UFRJ- Editora Revan.

WORLD BANK (2001) *Global Development Finance report*, World Bank, Washington.